



JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

J10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medellín, trece de febrero de dos mil veintitrés

Proceso	Especial - Violencia Intrafamiliar (consulta)
Denunciante	MARÍA EUGENIA URREA MURILLO
Denunciado	ANTONIO JOSÉ TORO HERNÁNDEZ
Radicado	No. 050013110010 – 2022 – 00587 – 01
Procedencia	Reparto
Instancia	Segunda
Sentencia.	General # 39 de 2023 Especial #10
Decisión	Declara Nulidad, Revoca Sanción. Ordena devolver expediente

Procede el despacho, a resolver lo que en derecho corresponde frente a la consulta a la sanción impuesta mediante providencia del 22 de septiembre de 2021 en la que se sancionó al señor **ANTONIO JOSÉ TORO HERNÁNDEZ**, por reincidencia de actos de violencia intrafamiliar contra la señora **MARÍA EUGENIA URREA MURILLO**. Cuyas medidas fueron adoptadas por la Comisaría de Familia Comuna Diez, La Candelaria, mediante resolución #046 del 10 de febrero de 2021.

ANTECEDENTES:

El día 17 de noviembre de 2020, la señora **MARÍA EUGENIA URREA MURILLO**, denunció por hechos de violencia intrafamiliar al señor Antonio José Toro Hernández, argumentando que este la ultrajó y la agredió física y verbalmente. Que estas agresiones son constantes.

En esa misma fecha, la Comisaría profiere la resolución #226 en la que se toman medidas provisionales.

Luego de practicadas las pruebas y escuchados los descargos del señor Antonio José Toro Hernández, se profirió la resolución #046 del 10 de febrero de 2021, en la que se resolvió:

- Declarar responsable de los hechos de violencia intrafamiliar al señor Antonio José Toro Hernández.
- Imponer como medida La Conminación para que se abstenga de realizar conductas constitutivas de Violencia Intrafamiliar.
- Revocó la medida provisional de Alejamiento del señor Antonio José Toro Hernández, de la señora María Eugenia Urrea Murillo.
- Ordenó terapia psicológica tanto para el señor Antonio José Toro Hernández,

como para la señora María Eugenia Urrea Murillo.

Informó las consecuencias que acarrea el incumplimiento y las demás consecuencias legales del proceso.

El día 3 de agosto de 2021, la señora María Eugenia Acude nuevamente a la Comisaría de Familia Diez, a denunciar al señor Antonio José Toro Hernández, quien indicó que el día 26 de julio ella llegó a la residencia cansada del trabajo y al preguntarle por algo, él la trató mal, le arrojó la comida, la insultó y la agredió físicamente. Que el día anterior la había agredido sexualmente y que es frecuente que utilice la fuerza y la obligue a tener relaciones sexuales. Como consecuencia de los golpes, fue hospitalizada desde el día 26 de julio hasta el día 2 de agosto y ya realizó la denuncia en la Fiscalía.

En esa fecha 3 de agosto de 2021, se dio inicio al trámite incidental por incumplimiento a las medias de protección, en la que se ratificó la conminación al presunto agresor, se ordenó el desalojo de la casa de habitación y el distanciamiento de la víctima. Se dispuso la protección especial por parte de las autoridades de policía. La remisión a Medicina Legal para valoración del riesgo de la víctima.

El día 19 de agosto se escuchó declaración de la señora María Eugenia Urrea Murillo, quien indicó que el día 13 de agosto el señor Antonio José la agredió nuevamente, que continúa con agresiones sexuales y cuando le pidió que se fuera de la casa, le dio una patada. Que por miedo no lo denunció el mismo día y que tampoco cumplió la orden de desalojo, porque se cambiaron de residencia.

El día 22 de septiembre se realizó audiencia de incidente a las medias de protección y se dispuso:

- Declarar responsable de los hechos de reincidencia por hechos de violencia intrafamiliar contra la señora María Eugenia Urrea Murillo, al señor Antonio José Toro Hernández.
- Decretar en contra del señor Antonio José Toro Hernández, la conminación para que cese todo acto de violencia, agresión o maltrato.
- Ordenar como medida definitiva, el alejamiento de la casa de habitación.
- Declarar el incumplimiento a las medidas de protección e imponer multa de dos salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto.
- Dejar vigentes las medias ordenadas por resolución #046 del 10 de febrero de 2021.

La resolución fue notificada por aviso y por auto del 18 de noviembre de 2022, se remite las diligencias a los juzgados de familia para surtir la respectiva consulta.

CONSIDERACIONES

1. Competencia de este Despacho Judicial.

Al tenor del artículo 52 de la Ley 2591/91, en armonía con el artículo 12 del Decreto 652/2001, la competencia para desatar el grado jurisdiccional de consulta de una providencia donde se impone una sanción por desacato a una Medida de Protección recae en los jueces de Familia, por lo que es viable que este Juzgado atienda dicha consulta.

2. Desarrollo de la consulta planteada.

La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de competencia funcional, a voces de la normatividad supra citada, tiene como finalidad que el superior revise oficiosamente las decisiones tomadas con ocasión del trámite surtido en un incidente de desacato a una medida de protección proferida por una comisaria de familia.

En este orden de ideas, corresponde a este Juzgado verificar si se cumplió con la debida tramitación de instancia, ante la Comisaria Diez La Candelaria, para concluir si la decisión es acertada, por haberse respetado el debido proceso (Artículo 17 de la Ley 294/96, modificado por el artículo 11 de la Ley 575/2000 en concordancia con los artículos 12 del Decreto Reglamentario 652/2001).

Verdad revelada es que toda persona que sea víctima de violencia intrafamiliar está amparada por las medidas de protección que establece la Ley 294/96, en concordancia con la Ley 575/2000, y el Decreto Reglamentario 652/2001. Medidas que también fueron modificadas por el artículo 17 de la ley 2126 de 2021.

Dicha protección tiene por objeto, además de garantizar los derechos de los miembros más débiles de la población (menores, ancianos, mujeres, etc.), erradicar la violencia de la familia; objetivo en el cual está comprendido el interés general, por ser la familia la institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y un espacio básico a la consolidación de la paz.

A la luz de la normatividad citada, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, el legislador tuvo como propósito prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, por muy mínima que sea, a través de medidas educativas, protectoras y sancionatorias, posibilitando a las personas que recurran a medios civilizados para la solución de sus conflictos, como la conciliación, el diálogo y las vías judiciales para así evitar en lo posible la respuesta violenta.

La violencia intrafamiliar suele estar relacionada con diversas causas “*culturales, sociales económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas que vulneran la dignidad humana*”, pero la violencia históricamente ha estado inmersa en relaciones de dominio y poder entre hombres y mujeres, es por tal razón que distintas disciplinas han unido esfuerzos para promover la igualdad entre géneros y poder reducir los actos violentos al interior de las familias”.

Es por ello que, la comunidad mundial consciente de dichos problemas sociales y en especial la discriminación que se dirige contra las mujeres ha desarrollado importantes tratados e instrumentos jurídicos para la protección de cualquier tipo de violencia de género, tal es el caso de la Declaración Sobre La Eliminación De La Discriminación De La Mujer (CEDAW 1981), la Declaración Sobre La Eliminación De La Violencia En Contra De La Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Siguiendo la misma preocupación e interés, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Convención de Belém do Pará (1995), prohibió todo tipo de discriminación contra la mujer y dotó de parámetros jurídicos a todos los estados adscritos a esta organización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, verbigracia el artículo 1 de Declaración de la ONU sobre la eliminación de la Violencia (1993) define así la violencia contra la mujer *“se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”*.

Sentadas la anteriores precisiones la violencia familiar es un fenómeno social que atenta contra la unidad familiar y comprende *“todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”*

En ese mismo sentido en el marco de los Derechos Humanos se ha enmarcado la violencia intrafamiliar *“como aquella acción realizada al interior de la familia por uno de sus miembros, que lesionan y amenazan la vida, la integridad, la autonomía, la libertad individual y la dignidad humana de quienes la integran, es decir, son aquellos actos los que producen daños físicos o psíquicos, la tortura, el trato cruel - intimidatorio o degradante - la agresión, el maltrato, la amenaza, el ultraje, el agravio y cualquier otra forma de agresión, es por tal razón que todos los estados deben proscribir toda conducta que atente, amenace o vulnere la integridad familiar.*

Acogiendo los conceptos y el interés internacional el Estado Colombiano mediante la ley 51 de 1981 adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual todos los países integrantes condenaran cualquier tipo y forma de segregación dirigida a la mujer. Mediante la Ley 248 de 1995, la Republica de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".

En consecuencia, el artículo 93 de la Constitución Política indica que *“Los tratados y*

convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno", dichos tratados conforman lo que se conoce como el Bloque de constitucionalidad, es decir la normas, tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia se integrarán al mandato superior interno y tendrán la misma relevancia e importancia que el derecho Constitución.

Con la expedición de la Ley 294 de 1996, se materializó el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, puesto que se establecieron las normas para prevenir, remediar y sancionar cualquier tipo de violencia familiar, a través de esta normativa las autoridades fueron provistas de directrices jurídicas para proteger al grupo familiar e imponer ciertas medidas.

Dentro de las medidas de protección a la que puede acudir las víctimas, vale resaltar las siguientes (i) ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima; (ii) ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima; (iii) ordenar al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; (iv) y ordenar una protección temporal especial para la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.

Posteriormente la Ley 575 del año 2000, reformó la Ley 294 de 1996, en el sentido que amplió dichas directrices jurídicas y otorgó facultad a los Comisarios de Familia, permitiéndoles la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas contra el agresor, la solicitud de pruebas periciales, la orden de arresto y todas aquellas funciones inherentes a la protección y prevención de todas las formas de violencia intrafamiliar.

Con respecto a las sanciones que resultan como consecuencia del incumplimiento de las medidas de protección se tiene inicialmente la multa, la cual es definida por la corte Constitucional ¹ como: *"Una manifestación de la potestad punitiva del Estado que refleja el monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de quien quebranta el orden público"*

Igualmente ha dicho que la multa: *"Constituye, por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, como toda sanción, sus elementos esenciales deben estar determinados en una ley previa a la comisión del hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el respectivo reajuste"*

La competencia para definir sus elementos estructurales, las condiciones para su imposición y la cuantía es del Estado, el sentido de su aplicación se da con el fin de forzar ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer las determinaciones legales y como su carácter es pecuniario, se convierte en un verdadero crédito a favor del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia

ha aclarado insistentemente que "el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable"⁴. Tampoco tiene el alcance de una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.

En contra de la decisión que tome el comisario sobre el incumplimiento de la medida de protección, únicamente en lo relacionado con la imposición de sanción, procederá el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo previsto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Ello con el fin como se indicó anteriormente de concluir si la decisión es acertada, por haberse respetado el debido proceso.

3. Caso concreto

De la revisión del proceso adelantado en contra del señor Antonio José Toro Hernández se vislumbra claramente que se incurrió en un error al no vincularlo legalmente al trámite incidental.

- Revisada la notificación por aviso que obra a folio # 121 del archivo #3 dice que se dejó el aviso de notificación por debajo de la puerta. Fecha 08/08/2021.
- La señora María Eugenia, en declaración rendida el día 19 de agosto de 2021, dijo que no radicó el oficio a la policía que la Comisaría le había entregado para la orden de desalojo, porque en esos días "Me pasé de casa y estaba esperando regresar al despacho para cambiar la dirección".
- Los oficios fueron entregados el día 3 de agosto de 2021 tal como se visibiliza a folio 125 del archivo #3.

Hace presumir lo anterior al despacho que para esa fecha 8 de agosto de 2021 que se dejó el aviso al señor Toro Hernández, la pareja no estaba radicada en la dirección carrera 48 #63 A- 105.

Posterior a la audiencia de sanción, a folio #153 del archivo #3, aparece dicha dirección para ser notificada la señora María Eugenia, cuando ya había anunciado el cambio de domicilio.

Tampoco hay constancia en el expediente, de cuál es la nueva dirección de las partes para surtir las notificaciones, no obstante, que figura también una nomenclatura a folio #157 que es: calle 59 # 42 -16, no se evidencia ninguna actuación donde conteste que esa es la dirección aportada para que el señor Toro Hernández reciba notificaciones y aunque aparece como recibida y se dice que vive allí, no es la misma a la que se le notificó el aviso apertura del incidente.

La Comisaría de Familia teniendo conocimiento del cambio de domicilio y además que la pareja debido a los múltiples conflictos, se separa y el denunciado se va de su

lugar de habitación, está en la obligación legal de hacer la notificación personal en debida forma y para ello debe hacer uso de las facultades que la ley le otorga, e incluso verificar la dirección a través de llamada telefónica, pero no se hizo ningún trámite tendiente a ello.

Es por excelencia la notificación personal, la forma real y efectiva de la vinculación al proceso, de manera que siempre que se conozca el paradero de quien debe ser citado, debe recurrirse a ello.

La situación antes descrita constituye una flagrante violación al debido proceso del demandado contemplado en el Artículo 29 de nuestra Carta Política que enseña: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio...”*.

Con base en lo anterior, la única solución viable es declarar la nulidad de la resolución del 22 de septiembre de 2021, que sancionó al señor ANTONIO JOSÉ TORO HERNANDEZ, por actos de violencia intrafamiliar, dado que se profirió con violación del debido proceso.

Se ordenará intentar la notificación personal del denunciado, haciendo uso de los mecanismos legales que para ello se disponen y así pueda ejercer éste el derecho de contradicción.

Se ordenará devolver las diligencias a su lugar de origen, para que se corrija la actuación tal como se indicó.

Por las razones expuestas el **JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE MEDELLIN EN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la decisión adoptada por la por la **Comisaria De Familia Diez La Candelaria**, mediante la resolución proferida el día 22 de septiembre de 2021, objeto de consulta, dentro del trámite incidental de INCUMPLIMIENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILAR, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Ordenar a la oficina de origen, que se vincule en debida forma al señor ANTONIO JOSÉ TORO HERNANDEZ, a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen una vez ejecutoriada la presente providencia.

NOTIFIQUESE

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by several smaller, more intricate loops and strokes.

RAMÓN FRANCISCO DE ASÍS MENA GIL

J u e z

Dgs.